



La criminalidad en El Salvador

**Jeannette Aguilar
Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas”
El Salvador**

Factores asociados

- Creciente vulnerabilidad socioeconómica y altos niveles de exclusión social.
- Cultura de la violencia, asociada al legado de autoritarismo.
- Debilidad institucional y baja credibilidad en los sistemas de seguridad y justicia.
- Incipiente Estado de derecho.
- Fácil acceso a armas y regulaciones laxas.
- Crecimiento y profesionalización de las pandillas.
- Preeminencia de respuesta estatal represiva.
- Creciente incursión del narcotráfico y del crimen organizado transnacional.
- Transición política de 2009 generó un reacomodo de redes de economía criminal.

Caracterización

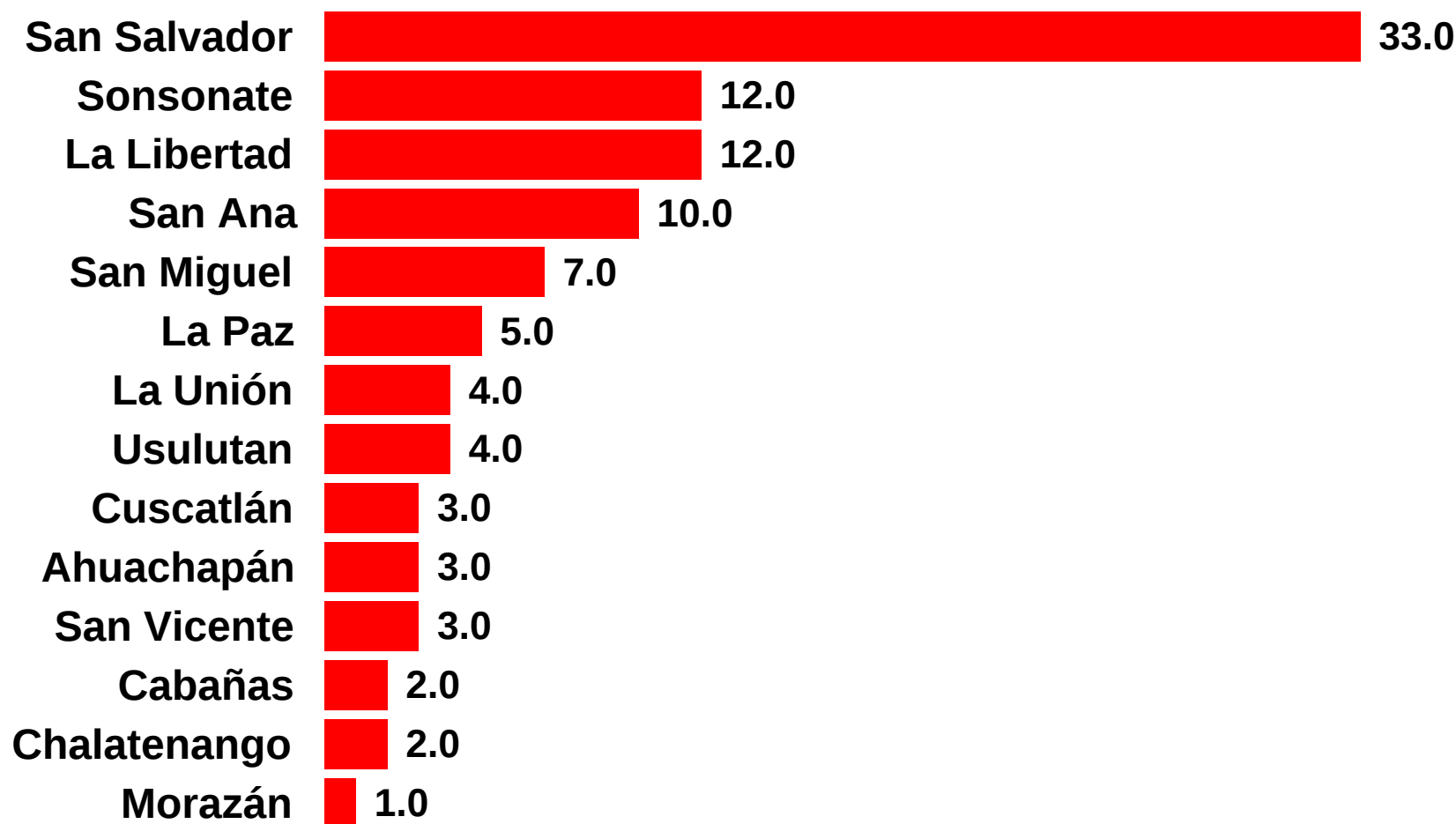
- Aumento exponencial de muertes violentas.
- Surgimiento de nuevos patrones delictivos/mayor deshumanización.
- Aumento de asesinatos múltiples.
- Crecimiento del sentimiento de inseguridad.
- Violencia con rostro joven.
- Instauración de formas de violencia organizada con capacidad de control territorial.
- No es ya un fenómeno predominantemente urbano.
- No está asociada a la defensa del poder político, pero es utilizada por sectores políticos.

Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, 2003-2011



Fuente: Base conjunta IML, FGR, PNC

Porcentaje de homicidios, según departamento, 2011 (n= 4,354)



Fuente: PNC, 2011

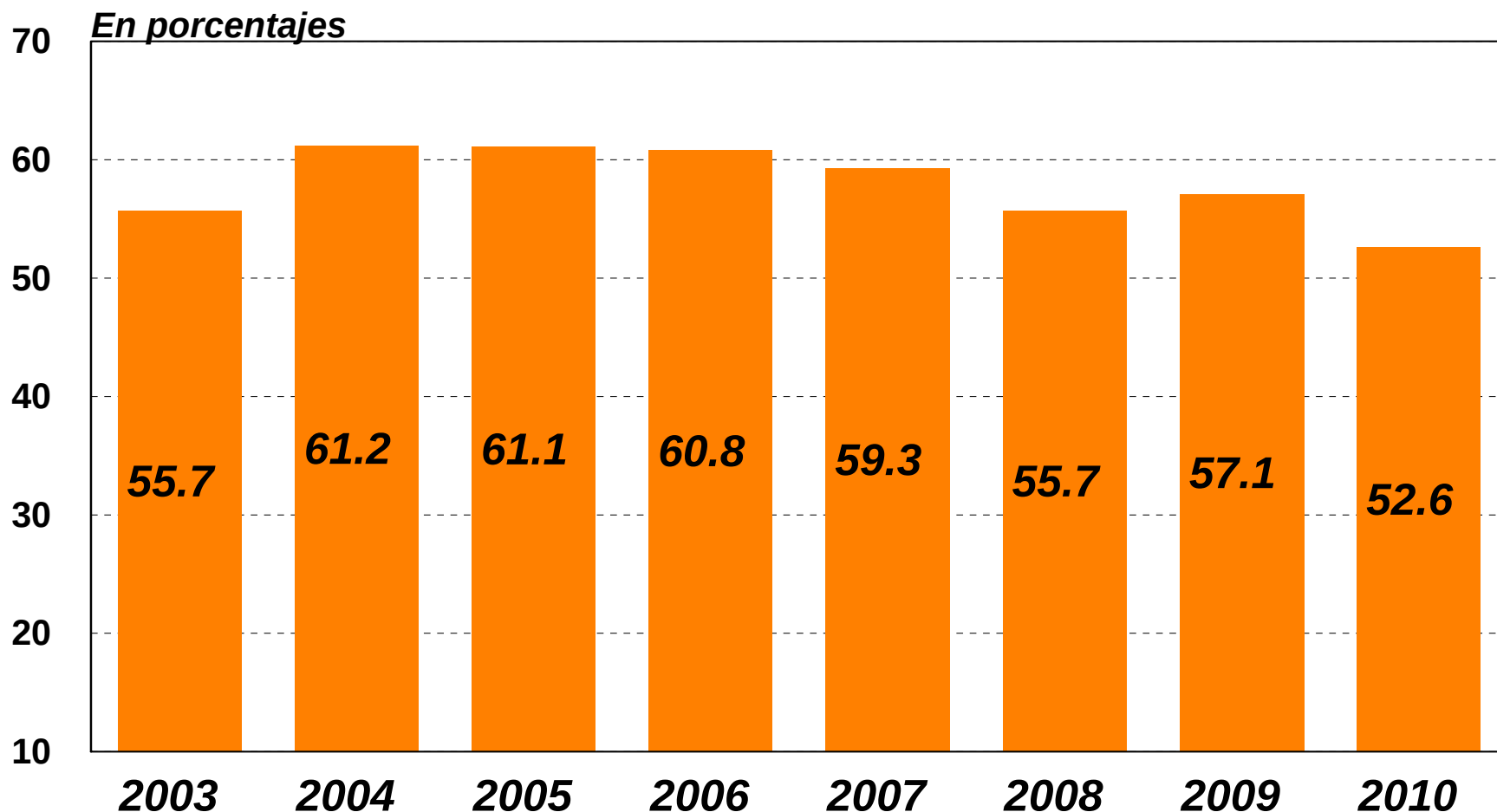
Los patrones de asesinatos

- Patrón de ejecución denota una planificación previa (secuestro, seguimiento de víctimas, desaparición).
- Aumento de asesinatos con lujo de crueldad y barbarie (señales de tortura, lapidaciones, estrangulamientos, decapitaciones, desmembramientos, cuerpos calcinados).
- Alto porcentaje de muertes con características de ejecución extrajudicial.
- Práctica de abandono de cadáveres en bolsas o sacos, en calles, predios baldíos, cementerios clandestinos, pozos.
- Comisión de muchos homicidios usando una combinación de armas.

Móviles asociados a homicidios, según Medicina Legal, 2004-2011

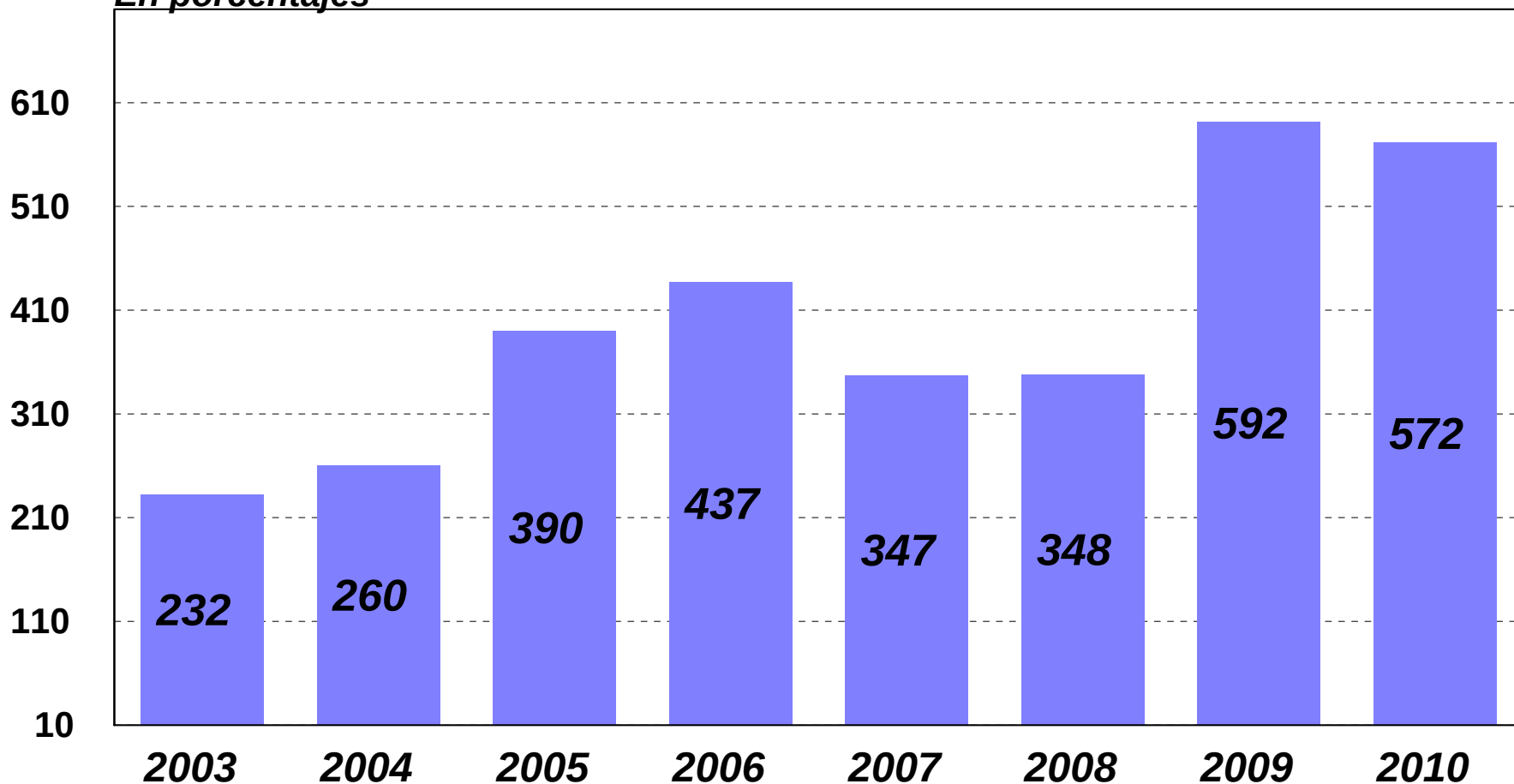
	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2011
Delincuencia común	33.7	23.3	18.2	16.4	16.3	14.3	17.9
Maras	9.9	13.4	11.8	11.0	12.3	10.2	10.6
Desconocido	48.4	59.0	67.0	68.2	67.6	73.1	67.8
Otros	8.0	4.3	3.0	4.4	3.8	2.4	3.7

Personas de entre 15 y 29 años asesinadas, 2003-2010



Homicidios de mujeres, según Medicina Legal, 2003-2010

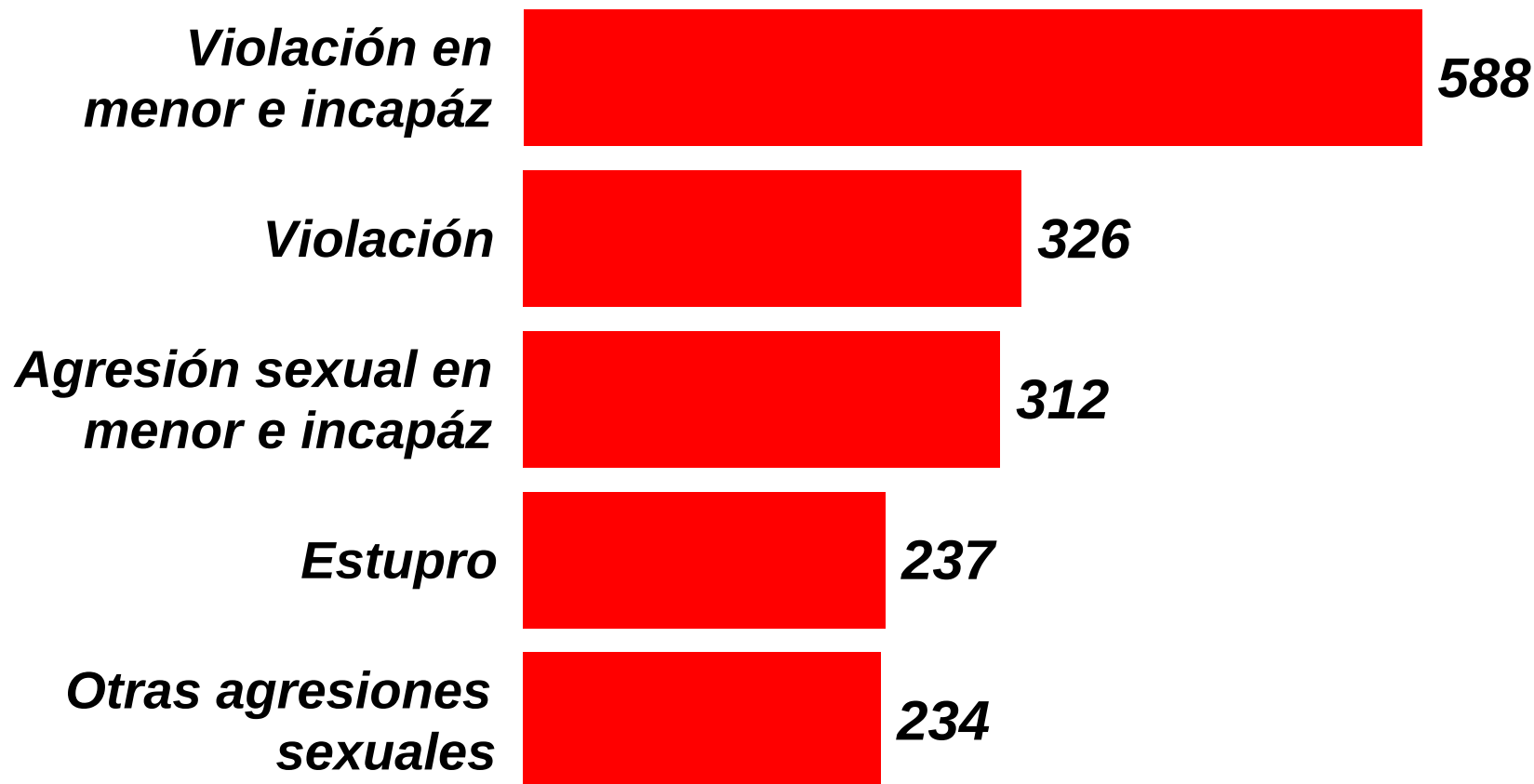
En porcentajes



Otros delitos consignados por la PNC a nivel nacional, 2009-2011

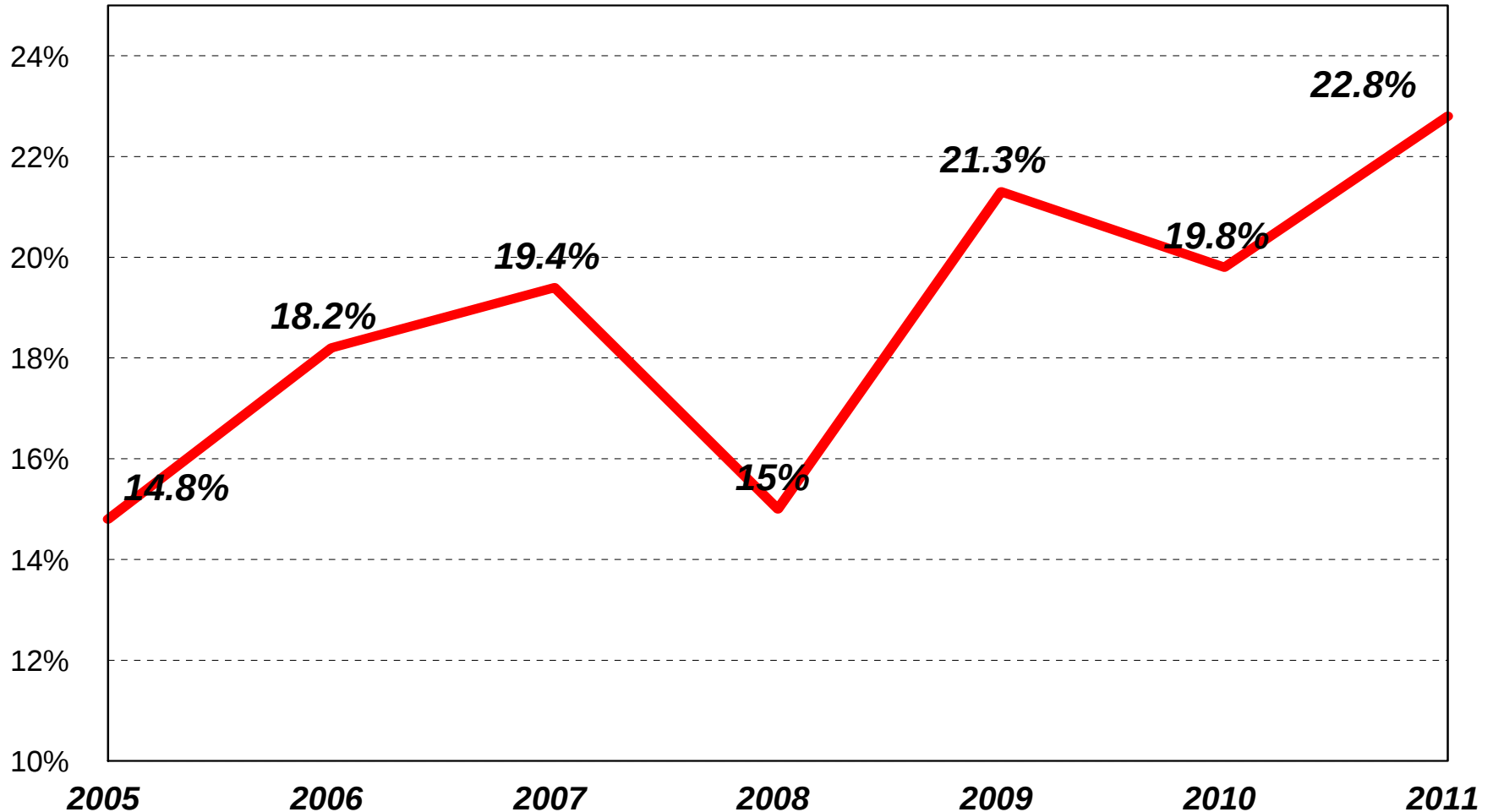
Delito	2009	2010	2011
Hurto	9,869	9,629	10,880
Robo	6,301	5,366	5,769
Lesiones	3,801	3,964	3,690
Extorsión	4,053	3,992	3,296
Robo vehículos	1,215	999	2,476
Violación	660	681	914
Secuestro	6	29	2

Denuncias de delitos sexuales, 2011 (n = 1,697)



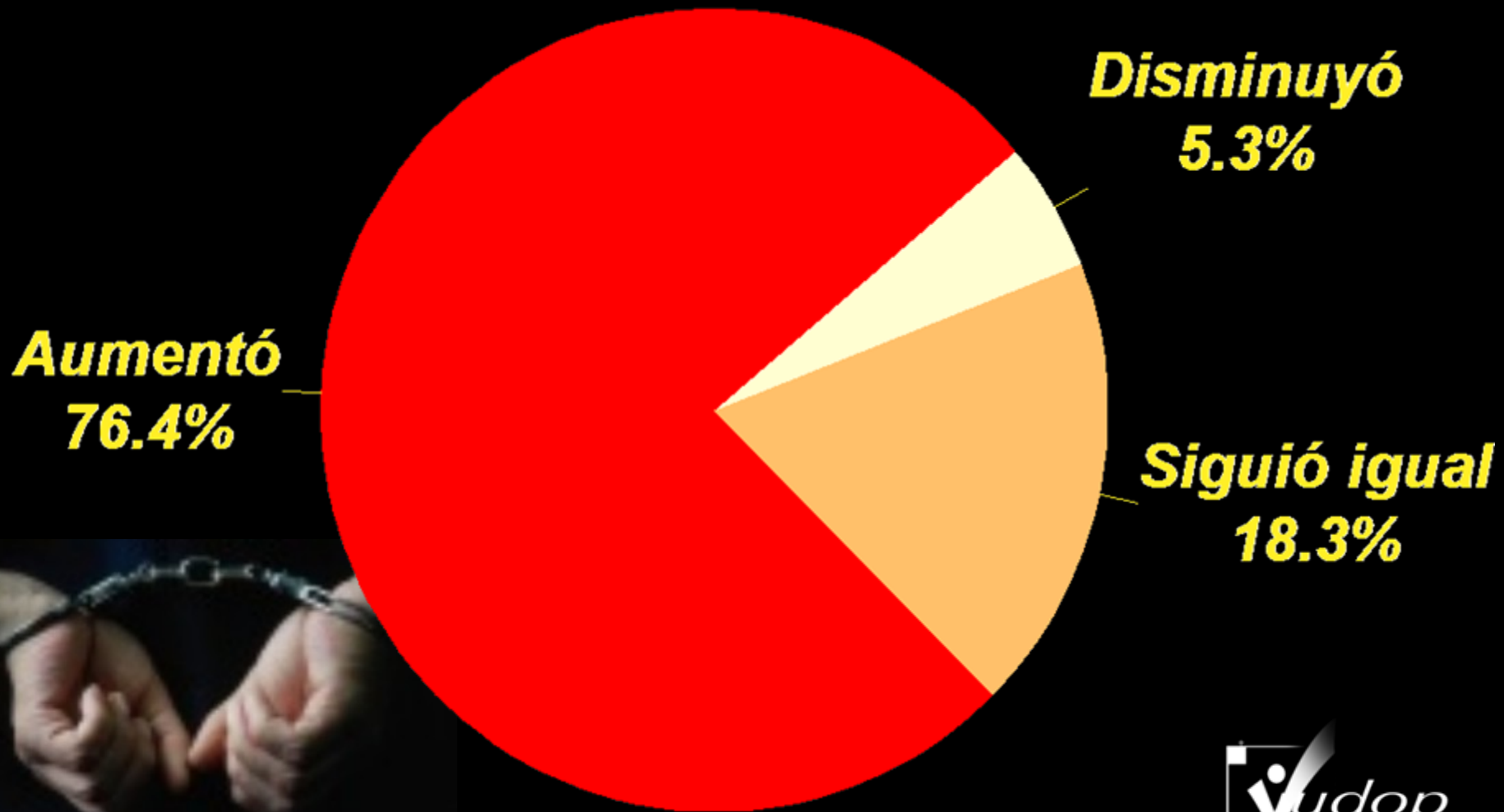
Fuente: PNC, 2011

Victimización por crimen, de acuerdo a encuestas de opinión, 2005-2011



Fuente: Series temporales IUDOP 2005-2011

***En comparación con el año pasado,
la delincuencia...***





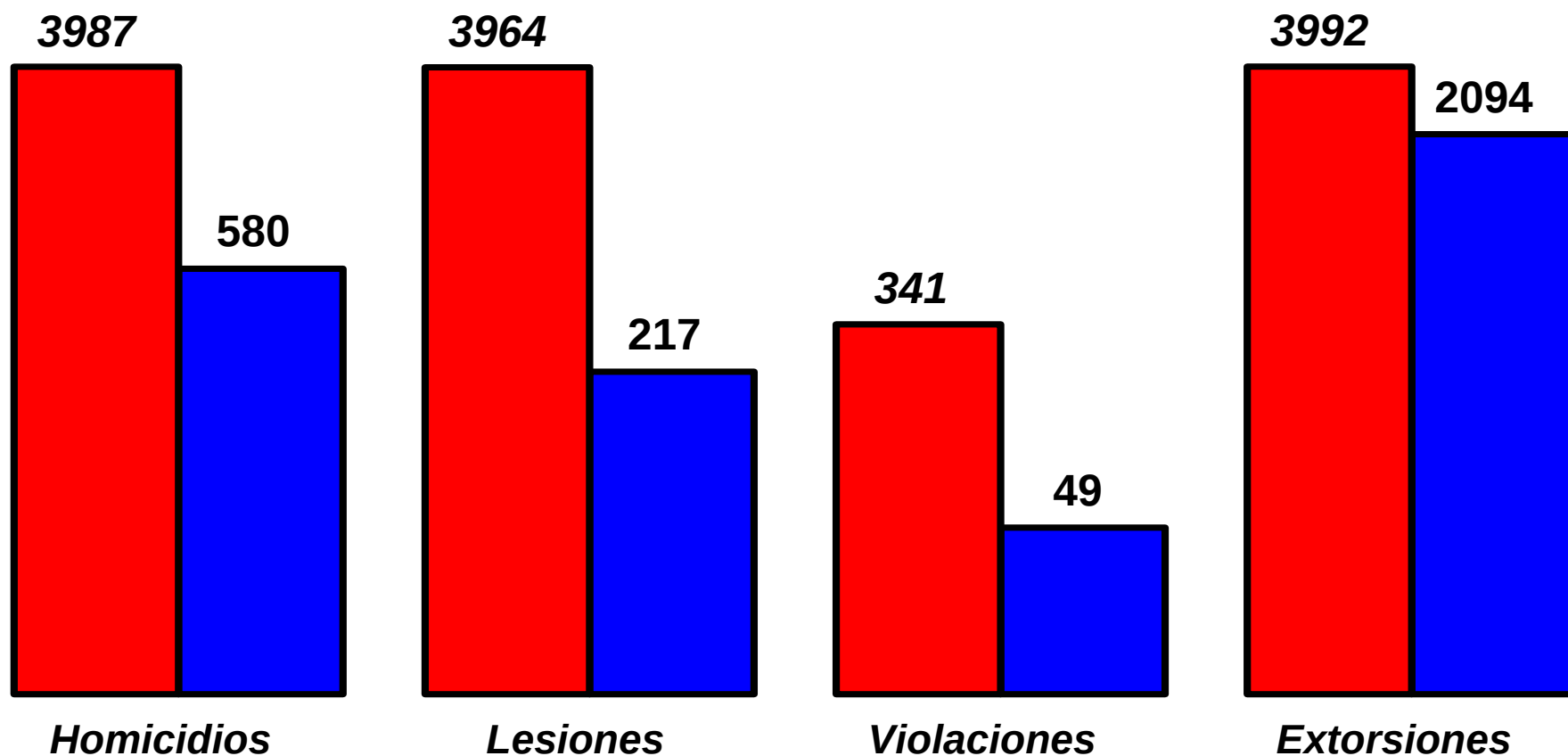
Escenario de violencia en el que participan diversos actores

Convergencia estratégica, táctica y circunstancial

- Crimen organizado transnacional.
- Bandas y mafias locales.
- Algunos políticos y empresarios.
- Delincuentes comunes.
- Grupos de pandillas.
- Grupos armados que realizan violencia extralegal (sicarios, grupos de limpieza social, entre otros).

Delitos en general y delitos atribuidos a pandilleros, 2010

 **Total delitos**  **pandillas**



Sistema de justicia

- Política penal populista y punitiva.
- Serios problemas de eficiencia en ámbitos como la justicia penal.
- Problemas de coordinación entre los operadores.
- Deficiente funcionamiento del sistema de defensa pública.
- Baja credibilidad en el sistema de seguridad y justicia.
- Extendida corrupción en el sistema judicial y penetración del crimen organizado en la FGR, PNC y órgano judicial.
- Debilidad del control constitucional y falta de independencia judicial.
- Sobrepopulación carcelaria y ausencia de procesos de rehabilitación y de inserción social.

Resurge la amenaza del militarismo

- Creciente protagonismo del Ejército.
- La seguridad pública está pasando a manos de los militares.
- Nueva ola de endurecimiento y de mano dura enfocada en las pandillas.
- Clima de opinión favorable a respuestas de mano dura.
- Participación de militares en la seguridad pública, que termina nutriendo al crimen organizado.
- Incremento de abusos y de violaciones a los derechos humanos, sobre todo en sectores pobres.

Escenario probable

- Situación actual de criminalidad tiene el potencial de generar una grave amenaza a la estabilidad democrática del país.
- Demanda de acciones severas y respaldo a medidas autoritarias socavan los avances democráticos y generan apoyos a “líderes fuertes”.
- Militares cobran más protagonismo político.
- Exacerbación de actitudes de justicia por cuenta propia.
- Riesgo de cooptación o sustitución del Estado por parte de las mafias: zonas de exclusión.
- Avance hacia una situación de guerra entre grupos delictivos rivales.

Desafíos en materia política

- Diseñar e implementar políticas integrales y multidimensionales que atiendan las causas y los efectos de la violencia.
- Viabilizar la coordinación interagencial (nivel nacional y local) y la articulación Gobierno-sociedad civil-sector privado.
- Articular la política de seguridad con la política social y con la política fiscal.
- Depurar profundamente a la Policía, al órgano judicial y al ministerio público.
- Avanzar en esfuerzos regionales de lucha contra la impunidad.

- Evitar caer en respuestas fáciles y populistas: reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades para la investigación del delito y profesionalización de las entidades responsables de impartir justicia.
- Definir estrategias y acuerdos regionales sobre control de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
- Exigir a países consumidores que adopten políticas para reducir la demanda, regular el comercio y la producción de armas, y controlar el lavado de dinero.
- Integrar políticas de protección social con la estrategia de prevención.

- Dar impulso y sostenibilidad a la gestión local de la seguridad.
- Asignar presupuestos estatales para los programas y proyectos de prevención y aplicación de justicia.
- Proporcionar alternativas de inclusión social a los jóvenes en riesgo.